



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ANA MARÍA RODRÍGUEZ ZULUAGA
Demandados: ACP COLPENSIONES y PORVENIR S. A.
Radicado: 05001 31 05 006 2018 00359 01
Sentencia: S- 020

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el día 05 de abril de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ANA MARÍA RAMÍREZ ZULUAGA demandó a PORVENIR S. A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por no habersele proporcionado una información completa y comprensible,

disponiéndose su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con la consecuente orden de devolver a esta entidad todos los valores recibidos con motivo de la afiliación de la actora, tales como bonos pensionales, aportes obligatorios, sumas adicionales con sus frutos e intereses, es decir, con los rendimientos financieros que se hubieren causado. Costas y agencias en derecho.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 7 de julio de 1963; que comenzó a cotizar al sistema de seguridad social a través del ISS desde el 27 de mayo de 1983; que el día 1 de junio de 2005 se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de PORVENIR S. A., entidad en la cual se encuentra afiliada en la actualidad. Que al momento del traslado, PORVENIR S. A. omitió su deber de información y de buen consejo respecto de las consecuencias que se producirían con el traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, toda vez que la información no fue clara ni fidedigna, y durante los años que ha estado afiliada tampoco le han brindado información completa ni comparativa entre uno y otro régimen. Manifiesta que el 22 de mayo de 2018 por iniciativa propia acudió a las oficinas de PORVENIR S. A. a efectos de que le hicieran una proyección de la mesada pensional en ambos regímenes, obteniendo como resultado la suma de \$781.242 en el RAIS y \$2.213.900. Que fue hasta ese momento que se enteró del engaño al que la expuso PORVENIR S. A., pues fue solo hasta esa fecha que la entidad le informó que su mesada pensional dependía de los movimientos del mercado financiero, de la rentabilidad del capital, de la fidelidad de en las cotizaciones, de los beneficiarios de la pensión de vejez, del estado civil, de la modalidad de pensión que escogiera, etc. Que intentó regresar a COLPENSIONES, pero le manifestaron que ya no era posible porque le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad mínima de la pensión de vejez.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES admite la fecha de nacimiento de la demandante y la de afiliación al ISS y el traslado a PORVENIR S. A., así como el de la proyección de las mesadas pensionales en ambos regímenes. Sobre los demás hechos manifiesta que no le constan por tratarse de situaciones donde no intervino. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demandante bajo el argumento que carecían de fundamento legal y fáctico. En su defensa propuso las excepciones de mérito o fondo que denominó inexistencia de la ineficacia del traslado al RAIS, Saneamiento de la nulidad relativa alegada por la parte demandante aduciendo que fue inducida en error, Prescripción, Imposibilidad de condena en costas y la de Buena fe.

Por su parte, PORVENIR S. A., acepta la fecha en que la demandante realizó su traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de PORVENIR S. A., niega que a la demandante no se le haya dado la asesoría adecuada, pues dentro de la asesoría que se le brinda a los afiliados se advierte que el objetivo pensional se logra en la medida en que el afiliado tenga una adecuada planeación con la que puede lograr pensionarse con un valor de la pensión igual o incluso superior al que podría obtener en el régimen de prima media con prestación definida y las mesadas pueden variar, conforme la edad del afiliado, la conformación del núcleo familiar, el valor del bono pensional si hay lugar al mismo, entre otros; recalando en todo caso que el traslado de régimen que efectuó la demandante se sujeta a la presunción de validez por cuanto se hizo de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993; respecto de los demás hechos indica que no le constan por cuanto se refieren a situaciones fácticas diferentes a la entidad. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó prescripción, falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas,

buena fe, prescripción de las obligaciones de tracto sucesivo y la de Enriquecimiento sin justa causa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 05 de abril de 2022, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín NEGÓ las pretensiones formuladas en contra de las demandadas; sin que hubiese condena en costas en el proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se declare la ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS sin solución de continuidad, y que se ordene a PORVENIR S. A. devolver a COLPENSIONES la totalidad de los dineros que tiene en su cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, cuotas de administración y demás frutos, además de bono pensional y la condena en costas para las partes vencidas. Sostiene que los deberes de información y buen consejo quedaron reglamentados desde el origen, es decir, fueron exigibles desde la creación de las AFP. Que así se puede apreciar en los artículos 13, ordinales b) y k); 106; 271; y 272 de la Ley 100 de 1993; el artículo 97 del Decreto 663 de 1993; el artículo 4º del Decreto 656 de 1994; el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 y los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994, es decir, todas estas normas son anteriores a la fecha en que tuvo lugar el traslado de régimen de la demandante. Indica también que PORVENIR S. A., para el año 2005, no le brindó la suficiente información de las ventajas y desventajas que acarrearía el cambio de régimen de pensiones o la continuidad en él, no le dijo cuánto sería el capital necesario para pensionarse, qué era el bono pensional, cuándo se redimiría, que si se pensionaba antes de la fecha estipulada por la ley el bono perdería valor, que su pensión dependía de la edad y el sexo de su pareja, de las condiciones del mercado, de su estado civil, etc.

Que PORVENIR S. A. tampoco demostró ni sumaria ni documentalmente, que le haya brindado una asesoría amplia y suficiente al momento del traslado, por lo que el fondo no cumplió con el deber de información, que solo al proceso aportaron un “formulario preforma de afiliación”, y que con esto no se puede hablar de libertad informada, pues a la actora no le brindaron suficientes elementos de juicio para la decisión. Indica también que la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia ha venido evolucionando desde hace más de 14 años, partiendo de las sentencias Hito del 9 de septiembre de 2008, como son las de radicado número 31314 y 31989, las cuales establecen que la carga de diligencia y cuidado y la carga dinámica de la prueba la debe emplear quien ha debido hacerlo, que para el caso no es más que el Fondo Privado, con base en el artículo 1603 de CC y 167 del CGP. También el artículo 53 de la Constitución Política contempla que la ley, los contratos, los acuerdos y los convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores, y que en este caso PORVENIR S. A. le ofrece a la demandante una mesada pensional equivalente a un salario mínimo cuando en el RPMPD la mesada alcanzaría una suma muy superior, lo cual no le fue advertido al momento en que se efectuó el traslado

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, COLPENSIONES presenta alegatos de conclusión, no obstante, no es posible impartirle trámite alguno a tal memorial por cuanto quien suscribe el mismo no acredita la calidad de apoderada de la entidad.

PORVENIR S. A. por su lado solicitó en el escrito de alegatos de conclusión que se confirme la sentencia de primera instancia y se absuelva a la entidad, pues la sentencia se encuentra ajustada a derecho, por cuanto en este caso no se acreditó la existencia de algún vicio del consentimiento con el cambio de régimen; que no se alegó ni

menos se probó ninguna de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación celebrado con PORVENIR S. A. es eficaz.

CONSIDERACIONES:

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: *i)* la señora ANA MARÌA RAMÌREZ ZULUAGA nació el 07 de julio de 1963; *ii)* se afilió por primera vez al sistema seguridad social en pensiones ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones el 27 de mayo de 1983; *iii)* el 01 de junio de 2005 suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PORVENIR S.A., entidad en la que se encuentra actualmente afiliada.

Ahora, según viene de verse, lo que pretende la demandante con la presente acción judicial, es que se declare ineficaz su traslado al RAIS administrado en este caso por la AFP PORVENIR S.A., para que, consecuentemente, se declare que su afiliación válida es la que corresponde a COLPENSIONES, con apoyo en que recibió un asesoramiento insuficiente e inadecuado por parte de los promotores del fondo privado, dado que, al momento de tramitar el traslado, omitió su deber de información y buen consejo, respecto de las consecuencias que se producían con el traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues en su sentir, la información brindada no fue clara, ni abundante ni fidedigna, y que durante los años que ha estado afiliada en dicho fondo tampoco le han brindado información completa ni comparativa entre uno y otro régimen de pensiones, lo que ocasionó que abandonara un régimen que claramente le era más favorable.

Al respecto, importa reiterar, tal y como ha sido dicho en múltiples providencias en las cuales se ha dirimido el tema de la ineficacia del traslado efectuado del Régimen de Prima Media con Prestación

Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, amplio y suficiente, es un deber exigible desde su creación.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993¹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información*

¹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, es posible concluir, contrario a lo que entendió la Jueza de Primera Instancia, que no se evidencia prueba alguna que permita tener por acreditado que el fondo privado PORVENIR S. A. realizó en ese momento un análisis integral de las condiciones concretas y subjetivas de la afiliada, con expresión de las ventajas y desventajas de ambos regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que ésta pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

El simple hecho de que se haya suscrito un formulario de afiliación de ninguna manera puede significar que con ello la entidad cumplió con su obligación de suministrar una información completa, precisa, adecuada y oportuna, relacionada con las ventajas y desventajas de permanecer en el ISS o trasladarse al fondo privado. Dicho documento no contempla un análisis de su caso en particular que contenga una proyección de su situación pensional concreta y específica, en uno u otro régimen, sino que simplemente se trata de un formato preestablecido, en el cual solo hace constar que tomó la decisión de manera espontánea y sin presiones, cuestión, que, en rigor, no se está controvirtiendo en este evento. También a este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia ordinaria, v. gr. sentencia SL 19447-2017:

*“Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, **no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad,***

encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].

Lo anterior permite dar aplicación al art. 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

Sumado a lo anterior, tampoco puede entenderse que, en el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, se haya obtenido confesión en cuanto a la completa y suficiente asesoría suministrada al momento de efectuarse el traslado, pues la señora ANA MARÌA RAMÌREZ ZULUAGA es clara en manifestar que al momento de realizar el traslado de régimen no le brindaron la información suficiente acerca de las ventajas y desventajas que acarrearía el traslado de régimen, no le dijeron cuánto era el capital necesario para poderse pensional en el RAIS, que simplemente le dijeron que en el fondo privado le “iban a pagar más platica”, sin brindarle la información relevante para tomar con total libertad la decisión de trasladarse o no de régimen pensional.

Téngase en cuenta igualmente, que la decisión del traslado de régimen pensional, supone un asunto complejo, cuyo alcance y comprensión se halla, ordinariamente, fuera del conocimiento del ciudadano; que puede requerir de un espacio analítico y comparativo en el tiempo; que reviste de una importancia vital en cuanto atañe al sostenimiento congruo a futuro del afiliado, y que no puede ser asumido de manera general, sino que cada caso es singular y especial.

Vistas así las cosas se **REVOCARÁ** la sentencia de primera instancia y en su lugar se declarará la ineficacia del traslado del régimen de

prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado en este caso por PORVENIR S. A., sin que resulte procedente la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidas a la prescripción.

Así mismo se ordenará a PORVENIR S. A. que proceda a trasladar el valor de los aportes recibidos por la afiliación, incluyendo los rendimientos financieros y sin descontar valor alguno por concepto de cuotas y gastos de administración, comisiones, garantía de pensión mínima y cuotas de seguros y reaseguros; criterio que ha adoptado la Sala acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas

oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en la sentencia 68838 de mayo 8 de 2019, que remite a las sentencias SL 31989 – 2008, SL 4964 de 2018, SL 4989 de 2018 y SL 1421 de 2019; reiterado en la sentencia SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667.

Adicionalmente se ordena a COLPENSIONES reactivar la afiliación de la demandante y recibir las anteriores sumas sin que exista solución de continuidad en la afiliación.

Sin costas en esta instancia. En primera instancia a cargo de PORVENIR S. A. y a favor de la demandante.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el día 05 de abril de 2022, y en su lugar dispone: **1) DECLARAR** la ineficacia del traslado de la señora ANA MARÍA RAMÍREZ ZULUAGA del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, realizado a PORVENIR S. A. el 01 de junio de 2005; **2) ORDENAR** a PORVENIR S. A., que proceda a trasladar a COLPENSIONES, el valor de los aportes recibidos por la afiliación de la demandante, así como los rendimientos financieros y sin descontar suma alguna por cuotas y gastos de administración, porcentajes de seguros y reaseguros, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima; **3) ORDENAR** a COLPENSIONES recibir las anteriores sumas, incluirlas en la historia laboral como semanas cotizadas y reactivar la afiliación de la demandante a esa entidad.

Sin costas en esta instancia. En primera instancia a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la demandante.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c6a6cf0a6d60b4d7715e04e420e83217264a08a29f1f74549e6ec9294910ef9d**

Documento generado en 09/02/2023 02:28:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>